

PREÁMBULO

NUEVOS SUEÑOS EMPIEZAN HOY

Hemos recorrido un largo camino de la mano de nuestros sueños, hecho de lucha contra el fascismo, acercando una tras otra a las nuevas generaciones, vislumbrando siempre una luz a lo lejos. Hemos confluído a lo largo de los años desde distintas vertientes y sensibilidades, con la certeza de que sólo juntos podíamos convertirnos en una fuerza transformadora, capaz de contribuir a crear una sociedad solidaria, de iguales, de plena libertad y democracia y alcanzar entre todos y todas las más altas metas. Llegó luego el tiempo de la construcción, de la concreción de los sueños, de medirnos con la realidad. Recorrimos un prodigioso camino de acumulación de fuerzas y voluntades que nos permitió alcanzar tres veces el gobierno nacional y ser gobierno departamental en numerosas oportunidades. El Uruguay es hoy otro país.

Quedan aún viejos sueños por cumplirse, es verdad y es importante recordarlo. Pero se han ido sumando y cobrando fuerza los sueños de hoy. Es necesario mirar más lejos, llegar más lejos, mucho más lejos. Son los derechos de la ciudadanía de hoy los que nos fortalecen cuando los compartimos, los que nos guían, nos conducen a nuevos territorios y desafíos, nos llevan a hacer una verdadera y plena opción de vida. Y los sueños de hoy sólo pueden partir de la realidad actual. Esa es la referencia, esa es la línea de base, ese es el punto de partida: el camino recorrido.

Luego de tres períodos de gobierno, las propuestas que requiere el Uruguay para continuar con el proyecto de cambios, necesitan de un nuevo y renovado impulso transformador. Los desafíos del futuro, en el escenario actual por el que atraviesa el continente latinoamericano, requieren que se conjuguen al mismo tiempo, el mantenimiento de las políticas que han dado resultados económicos y sociales conjugadas con nuevas dosis de innovación que afiancen el rumbo del país productivo con justicia social y profundización democrática. Pero tan importante como ello es escalar nuevos horizontes productivos que sienten las bases para un desarrollo sostenible de largo plazo

Estamos más cerca, pero siempre miramos más lejos. Y es por eso que a medida que avanzamos los horizontes cambian, porque cambia y cambiamos la realidad y porque se incorpora, una y otra vez, la mirada y los sueños de las nuevas generaciones. Fuimos cambiando, fuimos avanzando en la construcción de sueños de igualdad, libertad y solidaridad.

Sin duda un elemento central ha sido la seriedad y la solvencia en el manejo de la economía, que ha permitido tener un crecimiento sostenido atravesando las más severas e importantes crisis internacionales y regionales. Pero con una opción que definió el camino recorrido: crecimiento y justicia social como una sola unidad, inseparables. En los últimos años se ha avanzado en garantizar y restituir derechos de sectores de población históricamente postergados con un correlato en la Inversión Pública Social, la puesta en funcionamiento de las grandes reformas (laboral, tributaria, el sistema nacional integrado de salud, sistema nacional integrado de cuidados); el aumento presupuestal en la educación, el nuevo régimen de asignaciones familiares, el reconocimiento y avance de la nueva agenda de derechos, así como el despliegue de un conjunto de políticas públicas y estrategias de proximidad, que permiten afirmar que nuestro país ha logrado avanzar significativamente en mayores niveles de equidad y bienestar del conjunto de la población. Sin embargo aún queda camino por recorrer en términos de restituir y ampliar derechos, abordar vulnerabilidades y desarrollar políticas de redistribución y reducción de las desigualdades sociales.

El país fue construyendo en estos tiempos una imagen de país serio, de país que asumió con valentía la defensa de los intereses y el bienestar de su población, compitiendo y abriendo nuevos espacios en los mercados internacionales. En un contexto de fuertes desigualdades y tensiones, mantuvo en alto sus principios de soberanía y solidaridad a nivel internacional, aportando los mayores esfuerzos para la construcción de los espacios latinoamericanos. La imagen del país se construyó igualmente por nuestros avances en la reconstrucción del entramado social, asegurado por un cuerpo de leyes de vanguardia. Pero también se construyó desde la cultura, la ciencia y el deporte, donde se multiplicaron los esfuerzos por alcanzar los mayores niveles de calidad. Y desde afuera se miró y se valoró la construcción de una sociedad sobre principios solidarios, que asumió con coraje la complejidad de los desafíos de los nuevos tiempos.

El mundo fue cambiando en estos años. Fueron apareciendo nuevas promesas y posibilidades, pero también nuevas problemáticas que impactan en la vida de la sociedad y en los referentes de convivencia, cambios que nos desafiaron y exigieron nuevas respuestas. Cambios que suponen nuevos retos.

Cambiamos como sociedad. El entramado social dañado por la dictadura, que continuó desgarrándose en los tiempos del neoliberalismo, comenzó a zurrirse y recomponerse. Las políticas implementadas desde el ámbito local, tempranamente ensayadas en Montevideo y multiplicadas luego a nivel nacional, contribuyeron a un progresivo encuentro de nuestra sociedad consigo misma y con su tiempo. La larga tradición de lucha y resistencia de nuestro pueblo desplegada durante la dictadura y el neoliberalismo, encontró mayor espacio para su fortalecimiento. Se promovió la asociatividad de manera general, con muy significativos avances a nivel sindical, a nivel de participación de la sociedad civil y a nivel de economía social y cooperativa. Y fuimos avanzando en la construcción de la igualdad en derechos, en la expansión de los derechos de las personas, alcanzando instancias que hoy revelan el coraje de la sociedad para explorar nuevos territorios y asumir nuevos desafíos.

Cambiamos como territorio. Cada rincón del país, de nuestro “interior”, está hoy más cercano. Fueron importantes las inversiones para los desarrollos productivos, las políticas sociales y de igualdad de oportunidades, las inversiones en infraestructura y logística, los avances en la desconcentración de servicios públicos, pero también el desarrollo de nuevas propuestas educativas desde la primera infancia a la educación terciaria y superior, el trabajo y la cultura. Fueron importantes los avances en descentralización, en gobierno de cercanías y en fortalecimiento de ciudadanías. Fuimos testigos del fortalecimiento de algo central en la vida de una sociedad y un país: el sentido de pertenencia y el arraigo. Sentido de pertenencia y arraigo que son permanentemente conmovidos por el cambio civilizatorio global en el que navegamos, con su cohorte de luces y sombras y su fuerte impacto en la vida de las comunidades. Sentido de pertenencia y arraigo que son centrales en el camino a recorrer, posiblemente materia de los nuevos sueños.

Pero queremos y debemos llegar más lejos. Tenemos que seguir cambiando: llenar la parte del vaso que aún nos falta.

Hoy, como sociedad, como país, debemos plantearnos y asumir plenamente la siguiente interrogante: ¿cómo navegar en el siglo XXI con un proyecto progresista, profundizando el camino recorrido, siendo poco más de tres millones de habitantes?

EL URUGUAY QUE QUEREMOS: ¿CÓMO NAVEGAR EN EL SIGLO XXI CON UN PROYECTO DE IZQUIERDA?

LA DIVISORIA DE AGUAS: LA IGUALDAD ES LA DIFERENCIA

El modelo más tradicional y conservador se expone y se ofrece a la ciudadanía una vez más, como un camino posible. La historia cuestiona una y otra vez su sostenibilidad de largo plazo. Se basa en un modelo de crecimiento económico que genera y admite niveles ajustables de exclusión social, que derrama gotas sobre los más débiles en períodos de auge, y que les hace cargar sistemáticamente el peso de los desajustes y crisis. Modelo que rechazamos éticamente, que aumenta las distancias en el seno de la sociedad y genera profundas injusticias, desequilibrios y tensiones.

El camino alternativo es sin duda más difícil: construir una sociedad inclusiva, crecer con inclusión, considerando que la única construcción social sostenible es aquella que se apoya en principios de libertad, solidaridad y justicia social. Una sociedad de iguales, de iguales en derechos y oportunidades en nuestra plena diversidad, de irrestricto respeto y ejercicio de los derechos humanos. La igualdad, la libertad y la solidaridad son la diferencia.

UN PROYECTO DE PAÍS: LOS PRINCIPIOS Y LOS VALORES

El proyecto artiguista y sus principios marcaron una vocación para nuestro territorio. Las orientaciones básicas del proyecto artiguista tienen plena vigencia y el Frente Amplio se compromete a cumplirlas. Las tareas inconclusas y las banderas quedaron como un desafío para las generaciones venideras. En una tierra generosa para echar raíces, los ideales artiguistas fueron nutriendo a las nuevas generaciones y marcando

nuestra identidad. Enarbolar la bandera de Otorgués simboliza nuestros principios de libertad, igualdad, justicia social, solidaridad, democracia y soberanía. Principios y valores que han guiado nuestra fuerza política desde su creación y nos definen como una fuerza política de izquierda. Decía el General Seregni el 26 de marzo de 1971: *“el Frente Amplio es el legítimo heredero de la tradición artiguista y de ella toma sus banderas y su ideario”*

Todas las declaraciones públicas, acuerdos, manifiestos y compromisos asumidos por el Frente Amplio desde su nacimiento, reafirmaron los principios y valores que inspiraron el proceso revolucionario artiguista: la soberanía nacional, la democracia institucional, republicana y representativa, la justicia social y la integración latinoamericana. En nuestro VI Congreso, en diciembre de 2017, izamos en alto dos banderas históricas en la lucha y reivindicaciones de los movimientos sociales de nuestro país, que asumen, a la luz de los desafíos de estos tiempos, nueva dimensión y urgencia: nuestra fuerza política se ha declarado antipatriarcal y antirracista, manteniendo sus postulados históricos: antimperialista y antioligárquica. Estas definiciones nos llevan a trabajar por un modelo contra-hegemónico.

Como nunca, hoy es necesario levantar bien alto los principios de la izquierda, que no sólo implican una opción social y política, sino que acompañan una opción de vida, como ciudadanos y ciudadanas, como personas, como gobernantes: la solidaridad y la humildad, que hacen a la dignidad del ser humano, y la ética como principio, como conducta, como compromiso.

UN PROYECTO DE PAÍS: EL PAÍS QUE QUEREMOS

El país que queremos es un país de iguales, con oportunidades y recursos para ser mejores.

Un país de mujeres y hombres libres, con igualdad de derechos y oportunidades.

Un país donde nuestra diversidad sea una riqueza y nos dé las oportunidades de elegir qué queremos ser.

Un país donde la ética sea un referente central y se consolide como un valor intrínseco de la sociedad.

Un país solidario, entendiendo la solidaridad como principio ético central, pero además como única garantía de construir una sociedad democrática y sostenible.

Un país de capacidades, donde la mayor riqueza la constituyen las capacidades de nuestra gente.

Un país de aprendizajes, donde más allá de avanzar en alcanzar los mayores niveles de calidad y de culminación de todos los ciclos educativos formales, se desarrollen las condiciones para aprender durante toda la vida. Un país de aprendizajes por la apuesta a la calidad de la gente y como respuesta a las profundas transformaciones del mundo del trabajo que se procesan vertiginosamente a nivel mundial.

Un país de cultura y conocimiento, donde su desarrollo, planificación y construcción se apoyen en la cultura y la ciencia.

Un país con una sociedad constructora y creadora, por sus capacidades, por su elevación intelectual y su cultura, por sus convicciones y por su ética.

Un país con un modelo de desarrollo con justicia social e inclusión, basado en el desarrollo humano, ambiental y cultural como garantía de su sostenibilidad.

Un país donde la política y lo político constituyan un pilar de la construcción democrática, por la calidad de sus instituciones, por la calidad de los debates y por la transparencia en el quehacer público a todo nivel.

Un país que asuma con dignidad la defensa de su soberanía y aporte su esfuerzo en la construcción de un mundo de relaciones e intercambios internacionales sobre bases solidarias y de equidad.

Un país abierto a la expansión permanente de los derechos de las personas, sobre la base de la valoración de la diversidad y el reconocimiento de la dignidad humana como un valor fundamental.

Un país que privilegie y democratice el acceso a la información y la libertad de expresión de todas las personas, fortaleciendo permanentemente la calidad y la independencia de los medios de comunicación y su respeto a la dignidad humana.

Un país que profundice su integración territorial, de gobiernos nacionales y locales de cercanía, que se

apoyen en la participación de la gente y en una descentralización con creciente transferencia de capacidades de decisión a las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.

Un país donde sea bueno nacer y construir un proyecto de vida en cualquiera de sus rincones.

Un país que no olvide a los y las compatriotas que por diferentes razones debieron optar por otro país donde residir.

Un país que aliente los sueños y proyectos de las y los jóvenes, donde y desde donde las y los jóvenes puedan construir su lugar en la vida y su lugar en el mundo.

Una país que sea bueno también para llegar, en el que cada hombre o mujer, sin importar su origen, pueda elegir esta tierra para construir sueños y proyectos.

Un país donde el territorio, pilar del sentido de pertenencia y del arraigo, se convierta en motor principal de la vida política, económica, social, cultural y ambiental.

En suma, un buen lugar para vivir.

URUGUAY EN EL SIGLO XXI

El Uruguay inició el siglo XXI con una profunda crisis económica y una fractura social, que mostró la inviabilidad del proyecto de país llevado adelante hasta el momento. La crisis dejó como saldo altas tasas de pobreza, exclusión e indigencia, así como un gran incremento en la brecha instalada en el seno de la sociedad. Entre 2002 y 2004 se llegó a un derrumbe de la producción, del empleo y de los ingresos, con una profunda desintegración social. La pobreza alcanzó al 40% de la población, con una importante destrucción del aparato productivo, altas tasas de desempleo y de informalidad y una fuerte corriente emigratoria. Perdimos más de 100.000 jóvenes en apenas 4 años. Graves daños afectaron el tejido social, producto de la década neoliberal de los años noventa, que entre otras consecuencias nos trajo una fuerte migración interna asociada a la creación y ampliación de los asentamientos irregulares.

A partir del 2005, la población confió en nuestro proyecto de izquierda y progresista para construir el país y superar las grandes brechas de desigualdad que caracterizaron a los gobiernos neoliberales. Fue el inicio de un camino de cambios estructurales: desde 2005 se construye el país sobre la base de un país productivo y sustentable, de igualdad en derechos, con la concepción de la solidaridad como pilar de la fortaleza de una sociedad y una firme convicción republicana.

En Uruguay pueden identificarse tres grandes etapas de sus modelos de Estado social, que se vinculan claramente a tres etapas del desarrollo latinoamericano: el Estado social minimalista del período exportador primario, el Estado social de base contributiva durante el modelo de sustitución de importaciones (MSI) y el giro al Estado social refractario y la incorporación del mercado en los asuntos sociales, propio de la era del Consenso de Washington. Por último, en la actualidad se está desarrollando un cuarto momento del Estado social. Es un momento expansivo que combina criterios de necesidad, contribución y ciudadanía, y se imbrica con un modelo abierto y de orientación exportadora, pero con participación renovada del Estado. La última década y media marca el período de crecimiento económico con inclusión social más largo e intenso de nuestra historia.

Al llegar al gobierno, el FA se encontró con un país donde 1.200.000 personas estaban en situación de pobreza, medida por ingresos. En estos años, 950.000 de ellas lograron salir de esa situación. A lo largo de estos años se generaron más de 300.000 nuevos empleos: hoy hay 1.600.000 personas trabajando, 200.000 más que en el mejor momento de la década de los 90. Los salarios reales se incrementaron un 60% desde 2005, mientras que los salarios mínimos prácticamente se han triplicado. Además, las condiciones de trabajo han tenido mejoras profundas, con numerosas leyes que han consolidado derechos laborales antes no reconocidos y modificaron de manera contundente el desequilibrio de fuerzas entre capital y trabajo, germen fundamental de muchas de las desigualdades. Sólo por mencionar las más relevantes, la negociación colectiva obligatoria, la ley de fueros sindicales, la ley que regula las tercerizaciones o la Responsabilidad Penal del Empleador. Además, la cobertura de seguridad social se incrementó en más de 500.000 nuevas y nuevos cotizantes, lo que marca el proceso de formalización laboral más intenso jamás vivido en el país. Eso implica, ni más ni menos que derecho a jubilación, seguro de enfermedad, cobertura

ante accidentes laborales, atención de salud de todo el núcleo familiar. Y quizás lo más relevante es que estas transformaciones han superado vallas antes inexpugnables para los derechos de los/as trabajadores/as, como las puertas de las casas particulares donde se realiza el trabajo doméstico o los alambrados de las estancias, donde ahora se negocian salarios y condiciones de trabajo, la jornada de trabajo de 8 horas es ley y los laudos mínimos son obligatorios. Todos estos cambios, y algunos otros, confluyeron en una mejora sostenida en la distribución de los ingresos, a contrapelo de las tendencias globales, como no pasaba en Uruguay desde que hay mediciones.

La ampliación de recursos destinados a la educación habrá permitido al final de este período, duplicar en términos reales el salario docente, a la vez que aumentar la cantidad de docentes en todos los niveles. Se logró ampliar de manera fundamental algo tan relevante para el desarrollo de las capacidades cognitivas y afectivas como la educación en primera infancia: hoy asisten a centros educativos todas las niñas y todos los niños de 4 años y la inmensa mayoría de los de 3 años. A la vez, la expansión de la educación terciaria permitió romper una de las fuentes de desigualdad territorial más profundas y antiguas del país: hoy hay modernos y equipados Centros Universitarios Regionales en lugares tan diversos como Salto, Paysandú, Tacuarembó, Maldonado, Treinta y Tres o Rocha; al tiempo que se alcanzó que la mitad de la matrícula corresponda a estudiantes provenientes de familias en los que ellos son la primera generación que accede a la educación terciaria.

Por otra parte, el plan Ceibal y luego el plan Ibirapitá, constituyeron el mayor esfuerzo-país a escala internacional por democratizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El impacto educativo del plan Ceibal, de cosecha tardía como habitualmente sucede con todas las iniciativas en el área de la educación, está dando sus frutos y marcando las nuevas generaciones de uruguayos y uruguayas que pasan por la educación pública.

Las consecuencias de estos cambios no deben pasar desapercibidas. Indicadores de enorme significación social lo muestran. La mortalidad infantil está alcanzando cotas mínimas jamás vistas en nuestro país. De haberse mantenido las tasas de mortalidad infantil que había en Uruguay cuando el FA llegó al gobierno, habría hoy 300 niños y niñas por año que no llegarían a cumplir su primer año de vida.

Los progresos en la construcción de una sociedad de iguales también se han expresado en la primer Reforma de la Salud, y el establecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Reconocer y comenzar a garantizar los derechos de la población con discapacidades, la incorporación de numerosos colectivos al Sistema Nacional Integrado de Salud y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, implicaron un cambio fundamental en la matriz de seguridad social del país, atendiendo a las poblaciones con mayor dependencia.

En 2015, con la aprobación de la Ley N°19.353, se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), una de las prioridades del tercer gobierno del FA. Los cuidados se vienen consolidando como el cuarto pilar de la protección social junto a la educación, la salud y la seguridad social, reconociendo el Cuidado como un derecho.

El bienestar de una sociedad es una dimensión central para un desarrollo justo, democrático y sustentable. Desde la izquierda, el cuidado que todas las personas requieren a lo largo de su vida es un parámetro de medida para definir la inclusión, la participación y la distribución de servicios.

El SNIC avanzó en la atención a las personas en situación de dependencia (personas con discapacidad y personas mayores que requieren ayuda para realizar actividades de la vida diaria) y de niños y niñas de 0 a 3 años, apostando a la calidad de los servicios, la autonomía y el pleno desarrollo infantil.

En otro orden, se han ido procesando cambios de naturaleza estructural e institucional en numerosos aspectos que están fortaleciendo al país frente a los retos del mundo contemporáneo. Entre ellos se debe destacar: el cambio de la matriz energética, el muy fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones y sus aplicaciones en muy diferentes ámbitos, y el fuerte impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Estos logros son resultado de un proceso de integración latinoamericano, impulsado por los sucesivos gobiernos progresistas en la región, además de los altos precios de los commodities, el aumento del

comercio y las bajas tasas de interés internacional. Sin embargo, este avance en conquistas tan significativas se ha visto atacado por una contundente contraofensiva imperialista que intenta, de diversos modos, recuperar sus intereses y ganancias perdidas, generando destroz sensibles en la calidad democrática de la región. Sin embargo, en medio de semejante tsunami, y a contrapelo de lo que ha sido nuestra historia, este pequeño país mantuvo las conquistas populares y lentamente siguió avanzando. Esta realidad nos interpela a continuar la lucha hacia el 4º gobierno del Frente Amplio para defender y profundizar lo logrado.

Una década y media de fortalecimiento y transformación democrática del estado uruguayo.

En relación al desafío del fortalecimiento y la transformación democrática del Estado, se han verificado significativos avances, más allá del ámbito estricto del Servicio Civil, en la creación de institucionalidad, en el desarrollo de capacidades, en la asunción de nuevos roles y en el aumento de su eficacia. Pese a la complejidad de la tarea, claramente se cambió la imagen de la institución anquilosada que no avanza, a pesar del largo camino que queda por recorrer. Así, hoy el Estado uruguayo presenta fortalezas y capacidades para enfrentar los desafíos de las nuevas etapas. Pueden citarse: alta transparencia, rendición de cuentas institucional y reglas de juego claras, reformas estructurales en los aspectos más relevantes de la vida económica y social, fortalecimiento y racionalización de las estructuras, creación de ámbitos de interinstitucionalidad con integración de la población implicada, y precisión de los roles y capacidades de las instituciones públicas, y una agenda de derechos que genera más y mejores oportunidades para todas y todos.

En lo que refiere a la relación Estado-Sociedad, se pueden destacar, entre otros, los avances en gobiernos de cercanía, descentralización, acceso a la información y transparencia, participación social en la construcción y desarrollo de las políticas en numerosos ámbitos institucionales. Es un camino en el que queda mucho por recorrer, desde la desburocratización y el contralor eficiente a la complementación institucional, entre otros, apoyados en las enseñanzas de las acciones desarrolladas, con sus éxitos y sus limitaciones. Queda mucho por hacer, pero la vocación, el compromiso y la capacidad de cambio han quedado demostradas.

Se está recorriendo un camino que está marcando la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo, sin soluciones milagrosas ni atajos, en que se prioriza la mejora efectiva de las condiciones de vida de la población acompañando el crecimiento económico. Y esto se realiza en un contexto internacional extremadamente complejo e incierto.

Al mismo tiempo, se verifica un profundo cambio en nuestra propia sociedad, en sus valores y referentes. Por un lado, acompañando los cambios que se van produciendo en el país y que llevan a asumir con valentía nuevos referentes culturales y de vida, dentro de los cuales el matrimonio igualitario, ley de salud sexual y reproductiva, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, regularización y control del mercado de cannabis, las acciones afirmativas para las personas afrodescendientes, la ley de reproducción asistida, la ley de cuotas para las personas con discapacidad, son ejemplos notables. Al tiempo que los avances científico-tecnológicos en todas las áreas abren nuevas perspectivas y promesas, con profundo impacto en las tecnologías de la información y la comunicación y en el conocimiento del ser humano y la naturaleza, con permanentes y prodigiosas nuevas aplicaciones, cobran fuerza en la sociedad profundas preocupaciones centradas en la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, asociadas con las estrategias de desarrollo y prácticas de consumo. Las nuevas generaciones han levantado con fuerza estas banderas y las han incorporado en sus luchas y en su vida.

En el presente contexto de cambios profundos, al lado de los principios y valores de la izquierda, aparece con notable empuje y profundidad la problemática de género, cuestionando los referentes culturales que se están construyendo en el mundo globalizado, interpelando los recorridos históricos de la construcción de poder e interrogando a las fuerzas de izquierda y progresistas en busca de nuevas respuestas y caminos.

Las incertidumbres del mundo contemporáneo y el lugar del Uruguay

Las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo atraviesan un período de grandes riesgos y poca capacidad de gestión por parte de la comunidad internacional. Se verifica un deterioro de la autoridad de los organismos internacionales, con un significativo aumento de las acciones unilaterales. Al mismo tiempo, se han profundizado conflictos de base religiosa, étnica o de nacionalidades, que se propagan a

nivel subregional y aún internacional. A nivel económico, se ha producido una redistribución del poder, con un significativo desplazamiento de occidente a oriente. En forma paralela, el mundo financiero no regulado, con sus vinculaciones con el narcotráfico, la especulación y la corrupción, se ha convertido en un peligroso factor de desestabilización económica. Estos procesos se acompañan de una profunda fragmentación a nivel de los intercambios internacionales, pasando a un segundo plano los mecanismos de equilibrio y colaboración. Esto ocurre en un mundo globalizado, donde efectos e impactos de los cambios se propagan en forma inmediata, dificultando iniciativas de adaptación o mitigación.

La globalización se ha caracterizado por un aumento de la incertidumbre, que dificulta las miradas a largo plazo. Como país pequeño y periférico dentro del sistema capitalista mundial, es imprescindible tener una sociedad preparada para adaptarse a los cambios, para elegir su propio rumbo en el contexto de los desafíos políticos, económicos, sociales, científico-tecnológicos y culturales que irán marcando las próximas etapas – con su serie de variables e inseguridades – ejerciendo plenamente su ciudadanía y participando de un liderazgo político que haga posible navegar con un proyecto solidario, con un proyecto de izquierda, en esos contextos.

Son propios de esos contextos cambiantes e inciertos: la interdependencia, la falta de regulación del sistema internacional, el agotamiento de los ordenamientos y acuerdos a nivel internacional, la rapidez de las opciones desequilibrantes de los actores centrales y la rapidez con que se construyen y se desarticulan bloques internacionales.

A nivel regional, los esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos de integración han dado resultados limitados, tanto a nivel comercial como productivo. A nivel político, un ciclo de notables avances de políticas progresistas que tuvo una promisoría proyección en los proyectos de desarrollo regional, ha atravesado profundas crisis y ha retrocedido por el embate de estrategias políticas desestabilizadoras y errores en el ejercicio del gobierno.

Durante las próximas décadas nuestro país deberá insertarse y transitar en ese mundo de grandes desafíos e incertidumbres. El modelo de producción lineal dominante, basado en el uso de recursos finitos, así como el incremento incesante del consumo de bienes de vida útil cada vez menor, está produciendo un agotamiento de los recursos naturales y una creciente degradación del ambiente. El cambio climático generado por el hombre, constituye el hecho más claro del agotamiento de un modelo de desarrollo global. Al mismo tiempo, el incremento de la robotización y de la inteligencia artificial como elementos centrales de la transformación tecnológica en curso, hará desaparecer cientos de millones de puestos de trabajo en unos pocos años. Junto con estas dificultades asociadas a los modelos de producción y de consumo, el mundo enfrenta una creciente concentración de la riqueza y del poder, particularmente el financiero y el tecnológico. Esta concentración agranda particularmente la brecha entre los países con mayor y menor desarrollo, provocando entre otras consecuencias, dramáticas olas migratorias.

En este contexto global, el desafío para los países de desarrollo relativo menor como el nuestro, es encontrar el camino para avanzar hacia un modelo de desarrollo social y ambientalmente sustentable, sin contar con los recursos, particularmente los tecnológicos, de los países centrales ni tampoco sus mercados.

Al mismo tiempo, este contexto se constituye en una gran oportunidad si sabemos aprovecharla. Uruguay ha sido pionero para avanzar hacia ciertos paradigmas que hoy procuran las principales economías mundiales, particularmente en relación a la disminución de la huella climática del sector energético. Para avanzar hacia esa nueva economía, habrá que impulsar opciones de negocio rentables basadas en la llamada economía circular, centrada en la optimización del rendimiento de los recursos y en el equilibrio de los flujos de recursos renovables; fomentar actividades centradas en la economía colaborativa; impulsar el trabajo basado en actividades creativas, capacitando a los jóvenes y recalificando a los/as trabajadores/as en este sentido y, fundamentalmente, promover el desarrollo de conocimiento original para potenciar el agregado de valor a nuestros recursos naturales, disminuyendo el impacto ambiental. El impulso de estas nuevas opciones resulta particularmente relevante en el sector productivo primario, fundamentalmente el agropecuario. En suma, es posible identificar nichos de mercado en los que nuestro país puede generar bienes y servicios, particularmente demandados por un número creciente de consumidores/as de países centrales.

VASOS MEDIO LLENOS Y VASOS MEDIO VACÍOS: LA BÚSQUDA DE NUEVAS RESPUESTAS Y NUEVOS CAMINOS HACIA UN NUEVO CICLO DE TRANSFORMACIONES

El país ha avanzado mucho en los últimos quince años, pero sin duda hay mucho aún por hacer y por corregir. Estos han sido años en los que hemos acompañando el profundo cambio cultural vehiculado por la globalización y los avances tecnológicos, muy particularmente en información, comunicación y logística. Ello ha tenido un fuerte impacto en nuestra vida comunitaria. Las prácticas de consumo y la dependencia de la comunicación electrónica, son algunos ejemplos. Se han ido generado nuevas problemáticas en la sociedad contemporánea que exigen nuevas respuestas.

En particular, nuestros principales desafíos refieren a temas centrales de la agenda de izquierda, que requieren abordarlos con una nueva mirada y nuevas propuestas. Entre ellos destacamos:

El desafío de la igualdad ha sido un eje central de la identidad del FA. A partir de la llegada al gobierno se fortaleció la acción del Estado, primero para abordar la emergencia social y luego en la implementación de políticas sociales que robustecieran la matriz de protección social en una perspectiva de integración social. También a través de reformas de carácter universal: reforma tributaria, salud, vivienda, plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos, entre otras. Luego de estos años de acción, la persistencia de la desigualdad, producto de la profundidad de la estructura de desigualdad de nuestra sociedad, hace necesario un salto en calidad en las políticas públicas, ya que las acciones desplegadas no han logrado transformar los mecanismos de exclusión y encuentran en la estructura de la desigualdad un importante límite para alcanzar logros. La desigualdad se expresa en diferencias importantes en el acceso al mercado laboral, a servicios y prestaciones universales en cantidad y calidad (educación, salud, vivienda, etc.), en el ejercicio de derechos. Persisten las desigualdades entre géneros y generaciones, especialmente en la primera infancia, niños, niñas y adolescentes que sufren los mayores niveles de pobreza.

Pese a la importante disminución de la pobreza e indigencia, y los avances en políticas sociales, la reproducción de la desigualdad y las distancias en el ejercicio de derechos, a través de servicios estratificados y territorios segmentados, continúa. Se hace imprescindible la elaboración de nuevas propuestas que impidan la instalación de hecho de un sistema de protección social dual, donde una parte de la población accede a la protección social a través del empleo formal y otra parte son sujetos de una matriz no contributiva escasamente desarrollada. Para ello es necesario afirmar la perspectiva integral de los derechos en las políticas públicas.

Los límites encontrados por nuestras políticas sociales requieren –a partir de la experiencia de estos años de gobierno– superar visiones parciales, dispersión de esfuerzos y dificultades para afirmar una institucionalidad potente con fuerte involucramiento y coordinación de todas las políticas públicas a nivel central y territorial. La elaboración de nuevas propuestas también requiere que se continúen desarmando los circuitos de reproducción de la desigualdad y permitan fortalecer y ampliar la capacidad del Estado en materia de inclusión e integración social, así como fortalecer la cultura y las políticas de igualdad de género. En ese contexto, la infancia y la adolescencia aparecen como la prioridad para la articulación de estas políticas.

Es imprescindible profundizar y consolidar los cambios estructurales en educación: en materia de acceso y culminación de los ciclos educativos, con la proyección de la universalización de la educación media de calidad; en la generalización de las oportunidades de formación terciaria y superior; en su compromiso con el combate a las inequidades territoriales.

A la hora de asumir cuentas pendientes en relación a la convivencia y seguridad pública, corresponde asumir que queda mucho por hacer. No sólo en el combate al delito, sino a sus determinantes socioeconómicas y culturales, de anclaje esencialmente territorial. Es necesario profundizar y generar acciones que rompan con las pautas delictivas y su reproducción al interior de los distintos grupos sociales.

La economía del país ha crecido en forma ininterrumpida, al impulso de las inversiones y de un importante desarrollo de las exportaciones, fundamentalmente de nuestra producción agropecuaria, así como por un notable aumento del turismo, entre otras actividades. Hoy es necesario avanzar en la construcción y desarrollo de las bases de un modelo de desarrollo productivo, que no sólo se apoye en nuestras riquezas y

potencialidades actuales, sino que vaya abriendo el camino para los desafíos que enfrentará el país en los tiempos que vendrán y lo protejan de las vulnerabilidades de las *commodities*. En ese sentido, hemos avanzado insuficientemente en el desarrollo de propuestas basadas en la creación original de conocimientos y en innovación, de modo de ir preparando una progresiva diversificación de nuestra matriz productiva, que convierta a las capacidades de nuestra gente en nuestra principal riqueza. Este sigue siendo un largo camino que aún nos resta por recorrer.

Al mismo tiempo sigue siendo necesario desplegar nuevas políticas y mejores soluciones para dar sustentabilidad económica y social, a la economía social, al cooperativismo y a la estructura de emprendimientos familiares, de pequeño y mediano porte del campo y la ciudad, en particular a lo que refiere a mercados, financiamiento y servicios.

Trabajo y empleo siguen siendo puntos centrales de la agenda. Por un lado, por lo que nos falta en el camino de seguir dignificando oportunidades, calidad, condiciones de trabajo y el rol de los trabajadores y las trabajadoras en la vida del país; por otro, en relación a los profundos cambios que el país deberá seguir asumiendo en su matriz productiva. Deben crearse las condiciones para asegurar las transiciones necesarias, generando y promoviendo la creación de nuevos empleos, asegurando el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, es un desafío mayor convertirnos en un país de capacidades, un país de aprendizajes durante toda la vida.

El notable esfuerzo llevado adelante para asegurar inversiones, crecimiento y desarrollo económico, ha alcanzado niveles que requieren asumir con energía la responsabilidad de la sostenibilidad ambiental. El modelo de desarrollo actual genera externalidades ambientales negativas, cuyo impacto refuerza nuestras desigualdades sociales y territoriales. El país cuenta con capacidades técnicas y científicas, así como con una ciudadanía alerta y nuevos instrumentos de política pública para el ordenamiento territorial y el cuidado de los recursos naturales, imprescindibles para poder resolver las contradicciones que plantea el seguir creciendo en forma sustentable. Los desafíos de la sostenibilidad ambiental sólo pueden asumirse plenamente desde una perspectiva de izquierda: con la participación y la responsabilidad de los/as ciudadanos/as.

Nuestra sociedad ha verificado notables avances en su valoración del derecho a la igualdad sustantiva de todas las personas y en el reconocimiento a la riqueza de su diversidad. La transformación cultural que implica, para nuestro mayormente desactualizado Estado y para sus normativas y rutinas, aceptar cambiar las formas de inclusión de nuevos/as actores/as hasta ahora discriminados/as, junto con las nuevas tensiones asociadas a los valores y referentes vehiculizados globalmente, convierten a la temática de género, en todos sus aspectos, en un desafío mayor a asumir en estos tiempos. Un desafío que hace a la vida de todos los días, de todos y todas. Sólo una concepción de izquierda basada en el respeto por la dignidad humana puede asumirlo a fondo. Y todavía tenemos mucho para cambiar en nuestras actitudes políticas cotidianas.

Se han producido importantes avances en la expansión de los Derechos Humanos en la sociedad, pero lograr plasmar efectivamente un enfoque de integralidad de derechos requiere su arraigo en la cultura de la sociedad y de las instituciones, superando todo tipo de discriminación, incorporando el reconocimiento y el involucramiento social que conlleva a la asunción de responsabilidades.

Continúa siendo un desafío democrático avanzar en lo que refiere a resolver, de acuerdo a los estándares internacionales, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de terrorismo de Estado (1968 – 1985), ya que con ello se materializa la reparación integral a todas las víctimas con memoria, verdad y justicia.

Finalmente, debemos destacar lo que refiere a integración territorial y descentralización. En estos aspectos, las acciones de nuestros gobiernos sucesivos han procesado importantes cambios estructurales a nivel institucional y social. Sin embargo, queda un camino importante por delante que debe cobrar particular fuerza en la agenda de los nuevos tiempos. Sólo podemos concebir el futuro de nuestro país como un país integrado territorialmente, con un desarrollo armonioso y complementario en nuestras regiones y departamentos, con igualdad de derechos en cada rincón del territorio. Ello implica, necesariamente, profundizar las políticas de descentralización, jerarquizando, desarrollando y consolidando las instancias de

decisión y ejecución a nivel local, a través de toda la institucionalidad pública. Ello requiere, por un lado, avanzar en la complementación y coordinación de las instituciones públicas y fortalecer la presencia de las instancias de gobierno a nivel descentralizado. Por otra parte, es imprescindible seguir el camino del fortalecimiento de la responsabilidad y la participación ciudadana en ese proceso.

Asumimos el compromiso de procesar la Reforma de la Constitución en los dos primeros años del próximo período de gobierno. Los primeros pasos en esa dirección serán la reinstalación de la Comisión de Reforma Constitucional del Frente Amplio, completar la elaboración del proyecto acordado en el último Congreso Rodney Arismendi, y retomar el diálogo con la sociedad civil y otros actores políticos.

El mecanismo de reforma será acordado en función de la realidad política a principios del año 2020.

EL FRENTE AMPLIO: UN INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO PERMANENTE

Nuestra fuerza política ha sido un protagonista central en casi medio siglo de la vida del país. Con las responsabilidades de gobierno actuales se completarán 15 años de gobierno nacional y una larga experiencia a nivel de gobiernos departamentales y municipales, donde destacan los 30 años en la Intendencia de Montevideo. El FA es una expresión unitaria de la izquierda, la más antigua en el mundo y la única que estuvo conformada desde su fundación por partidos marxistas, el partido demócrata cristiano y desprendimientos de los partidos tradicionales. Supo conjugar desde sus inicios dos cualidades fundamentales: la profundidad con amplitud, claridad y firmeza de principios de una fuerza política con vocación de acción permanente, que definía en su declaración constitutiva y llamamiento del 5 de febrero de 1971, “un programa de contenido democrático y anti- imperialista, que establezca el control, y la dirección planificada y nacionalizada de los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de intermediarios, banqueros y latifundistas, y realizar una política de efectiva libertad y bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la república.”

Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio, de sus caducas estructuras y de la conquista de la efectiva independencia de la nación. Amplitud consecuente para estar siempre abiertos a la integración de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción nacional progresista y democrática avanzada. Con su particular estructura de alianza de sectores y de movimiento, apoyado en un pacto fundacional de concertación social amplia y unidad de acción, ha construido una larga historia de acumulación de fuerzas y voluntades, desde la resistencia y la oposición hasta ser gobierno nacional con mayorías parlamentarias por tres periodos. Hoy, esta fuerza política aspira a su cuarto gobierno y es mirada, como ejemplo esperanzador, desde muy distintas latitudes.

Tal vez nunca imaginamos lo que podría llegar a ser el desarrollo y la historia de nuestra fuerza política. En los años de resistencia y oposición, la lucha permanente nos hacía confluir naturalmente en la acción, desde los matices y diferencias de la diversidad de nuestras filas. Luego, acompañando una progresiva y prodigiosa acumulación de fuerzas, llegaron los tiempos de gobernar. Gobernar implica optar, definir prioridades permanentemente, aún en el marco de las definiciones compartidas en un programa o en un plan de gobierno. Gobernar implica gestionar, hacer que las cosas sean posibles. La buena gestión nunca será la única bandera, pero es un requisito: conducir un país y asegurar el rumbo comprometido con la ciudadanía, requiere la mejor gestión. Allí no hay matices; se requiere firmeza en el timón y fiel compromiso con el programa. Pero no sólo eso. Como solía recordar el General Seregni, citando a Max Weber, gobernar implica permanentemente navegar en un equilibrio entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. La ética es el principal pilar de un gobierno de izquierda. Nuestra historia ha mostrado que el Frente Amplio ha sido y es celoso y severo guardián de sus principios.

Gobernar implica opciones sobre temas centrales en la vida y el futuro del país. Un gobierno debe apoyarse en la fuerza política que le da el rumbo estratégico y lo sustenta. Que acompaña, defiende y vigila celosamente el cumplimiento de su programa. Las opciones principales, aquéllas que marcan rumbos, son

objeto de análisis y discusión profunda, sistemáticamente. Así debe ser. Sólo un gobierno que avanza solitario, apoyado en su sola autoridad y de espaldas a la gente, elude el debate, el intercambio firme de ideas y a los cuestionamientos.

Ese debate interno, que ha sido frecuentemente objeto de alarma de unos/as y de frívola crítica de otros/as, es riqueza de la fuerza política y responsabilidad y garantía frente a la ciudadanía. Las correlaciones de fuerza interna han sido y son cambiantes, expresando los cambios de los tiempos y sintetizando las miradas de los sectores sociales que protagonizan los mismos. Esto se manifiesta en el ajuste fino del timón. Mayorías y minorías se van dibujando una y otra vez, conformando espacios generosos las primeras y conductas leales las segundas, unas y otras del mismo lado de la gran divisoria de aguas, fieles a los principios y al programa acordado. Sólo con un debate franco y democrático es posible construir consensos. Y consenso es igual a unidad en la acción.

Esa es nuestra fuerza política hoy: una herramienta para el cambio permanente, para construir los sueños de hoy, para expresar el gran espacio político y social que conforma la fuerza constructora de un país solidario, un país de iguales, un país de justicia social.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

El programa es, en primer lugar, el documento que la fuerza política ha construido participativamente y que presenta a toda la ciudadanía con la orientación general de las políticas y proyectos relevantes de su futuro gobierno. Ha sido y es un compromiso con toda la ciudadanía, y constituye una guía y un instrumento de contralor para la gente, para las autoridades electas y para la propia fuerza política, como ha sido demostrado en años de gobierno a nivel nacional y departamental. El compromiso con un programa de gobierno es un elemento imprescindible para la construcción democrática.

UN DOCUMENTO FUNDACIONAL DE RENOVACIÓN PERMANENTE

Para el Frente Amplio el Programa ha sido y es la definición misma de la fuerza política. Selló la instancia fundacional de 1971, que marcó la confluencia de diversas vertientes en un sueño y un proyecto de país. Las bases de la alianza de sectores y movimiento que constituye la fuerza política se renovó una y otra vez, acompañando los cambios de los tiempos, sobre la base de principios que han trascendido épocas y personas. En cada tiempo, el Programa se ha ido enriqueciendo, asumiendo los grandes cambios que han sacudido y sacuden al mundo en las últimas décadas, con su impacto en todos los ámbitos del quehacer político y de la vida, manteniendo el rumbo marcado por sus principios fundacionales. Y en cada tiempo, el Programa ha asegurado que el Frente Amplio sea una fuerza política abierta a nuevas confluencias, con su carga de sueños y proyectos, en torno a los principios y valores que lo guían.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA: UNA MIRADA AL FUTURO COMPARTIDA

El Uruguay ha cambiado y debe seguir cambiando. El camino recorrido en estos años ha sido importante, pero quedan muchas tareas por completarse y cambios profundos por procesar. Hemos cambiado nosotros como sociedad. Pero los sueños siempre son hacia adelante. Para todos y todas, y fundamentalmente para las nuevas generaciones, la línea de base de la que partir, la realidad a transformar, es la de hoy.

El proyecto de izquierda debe ir al encuentro de una sociedad constructora de su destino; de una ciudadanía del siglo XXI, en la que todas las voces se encuentren en el tiempo y en la acción. Debemos confluir con nuestra plena y mayor diversidad. Debemos multiplicar todas las formas disponibles de encuentro y comunicación. Sólo así podremos fortalecernos como sociedad constructora de su futuro, constructora de su destino.

UNA CONSTRUCCIÓN ABIERTA, UNA CONVOCATORIA A RECORRER EL CAMINO JUNTOS

Una fuerza política que asume la responsabilidad de expresar y conducir un país, que busca profundizar los cambios que se vienen procesando desde 2005 y desafía al futuro con principios de solidaridad, igualdad y justicia social, necesariamente debe hacerlo con la gente. Sólo se puede llegar más lejos confiando en la gente, escuchando a la gente, construyendo con la gente. Por eso este programa se ha elaborado en forma abierta, convocando a todas y todos, a todas las voces, en todos los rincones del país. La síntesis presentada

es el resultado de un gran esfuerzo de construcción de confluencias, que finalmente es asumido con plena responsabilidad política por la máxima autoridad de nuestra fuerza política, nuestro Congreso. Renovamos así nuestra voluntad de seguir avanzando juntos y, fundamentalmente, renovamos nuestro compromiso con la sociedad, para avanzar juntos y juntas.

El Programa es entonces, una mirada al futuro compartida y una invitación a hacer camino juntos/as.

EL PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO

NUESTRAS RESPUESTAS Y NUESTRAS PROPUESTAS: HACIA UN NUEVO CICLO DE IZQUIERDA

En el marco de las consideraciones del presente preámbulo y a partir de: las definiciones adoptadas por nuestro Plenario Nacional en julio de 2017, sobre la Estrategia Política del Frente Amplio hacia el 2020; de las resoluciones de nuestro VI Congreso Rodney Arismendi de diciembre del 2017, que definieron como ejes centrales en relación al Programa de Gobierno 2020-2025: a) el desarrollo humano duradero para todas las personas: integral y sostenible, b) la profundización de la transformación democrática de la sociedad y el Estado y c) la integración al mundo y a la región, se presenta a continuación la propuesta de las Bases Programáticas del Frente Amplio para el período de Gobierno 2020-2025. Las mismas están estructuradas en torno a cinco desafíos:

- 1) Desafío del Desarrollo**
- 2) Desafío de la Igualdad y la Diversidad**
- 3) Desafío de la Integración y la Inclusión**
- 4) Desafío de la Democracia**
- 5) Desafío de la Inserción Regional e Internacional**